



Revista Austral de Ciencias Sociales

ISSN: 0717-3202

revistaaustral@uach.cl

Universidad Austral de Chile

Chile

Aguilera Ruiz, Óscar; Alvarez Vandeputte, Javier
El ciclo de movilización en Chile 2005-2012: Fundamentos y proyecciones
de una politización
Revista Austral de Ciencias Sociales, núm. 29, julio-diciembre, 2015, pp. 5-32
Universidad Austral de Chile
Valdivia, Chile

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45955900001>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

El ciclo de movilización en Chile 2005-2012: Fundamentos y proyecciones de una politización*

The mobilization cycle in Chile 2005-2012: Basis and projections of a politicization process

ÓSCAR AGUILERA RUIZ**

JAVIER ALVAREZ VANDEPUTTE***

* Este artículo es resultado del trabajo realizado por los autores y que ha contado con el apoyo de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile a través del Programa PROA en su convocatoria 2014.

** Departamento de Estudios Pedagógicos, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. Correo electrónico: oaguilera@u.uchile.cl

*** Correo electrónico: j.alvarez.v@hotmail.com

Resumen

En el presente artículo sometemos a reflexión las características del ciclo de movilización desarrollado en Chile entre los años 2005-2012, específicamente, lo relativo al sistema político, los repertorios de protesta y la estructura de oportunidades políticas de los movimientos sociales. A partir de datos secundarios provenientes de informes de prensa, se ha operacionalizado y construido una base de datos mediante la cual se generó un conjunto de indicadores para aproximarnos a las características e impactos que estos ciclos movilizatorios han tenido en relación a un proceso de politización del conjunto de la sociedad chilena.

Palabras clave: movimientos sociales, repertorios de protesta, ciclo de movilización, politización, Chile.

Abstract

In this article we reflect about the characteristics of the cycle of mobilization movements, developed in Chile between the years 2005-2012. This reflection takes into specific concern the political system, repertoires of protest and their relationship to the structure of political opportunities. Data from secondary published reports in the media has been compiled into an operationalized database that allows us to get closer to the characteristics and impacts that these mobilizing cycles have in relation to the process of politicization of the entire Chilean society.

Key words: social movements, repertoires of contention, cycles of contention, politicization, Chile.

1. Contexto sociopolítico y movimientos sociales chilenos en la transición y postransición

En el Chile de los últimos 30 años es posible pensar dialécticamente la relación entre sistema político y movimientos sociales. En contextos de conflicto social ambos polos se definen por su oposición, mientras en otros la definición pareciera apuntar a una integración y una síntesis entre movimientos sociales y sistema político. De allí que la relación entre sistema político y movimientos sociales no pueda ser comprendida por fuera de los contextos sociopolíticos de la propia sociedad chilena. Es así como la historicidad del movimiento social tiene sus propias particularidades en el periodo político denominado “transición”, y que se ha ido transformando con el arribo de una “postransición” que la misma acción de los movimientos sociales contribuye a inducir. Lo que indica ese tránsito es un cambio en las condiciones sociopolíticas, y con ello recurrimos a Garretón et al. (2004) para referir la forma de articulación entre las distintas esferas sociales en una sociedad: el Estado, el sistema de representación política (cómo se procesa lo político), y la base socio-económica de agentes con orientaciones y relaciones culturales específicas.

Es así como argumentamos que la característica sociopolítica fundamental de la postransición es la incapacidad del sistema político para procesar y resolver los conflictos que son construidos por la acción colectiva de los movimientos sociales. Mayol y Azócar (2011) refieren *una crisis sistémica*, que etiquetan de “politización”, y que se caracterizaría por una “acumulación de malestar” debido a la inhabilidad del sistema político de asumir y

solucionar diversas situaciones de pobreza, desigualdad, discriminación, entre otras. Esta crisis tiene un correlato en el enfoque académico adoptado en torno a la política y la sociedad chilena. Parece haber quedado atrás la mirada optimista, neoconservadora, que veía en la monetarización de la sociedad chilena la fórmula para reconstituir el vínculo democrático: “[e]s este rasgo sistémico asumido por la política lo que explica que la redemocratización haya significado la muerte de la politización” (Cousiño y Valenzuela 1994: 24). Paradoja de lo social es que, 20 años después, la sociedad chilena parece estar colocada en una crisis política originada en un proceso particular de politización.

Observemos algunos procesos que permitan ubicar, precisamente a nivel de sistema político, la interrogante sobre los cambios y las continuidades que ponen en escena los movimientos sociales. Respecto del primer nivel de análisis, las condiciones sociopolíticas del periodo de transición revelan que lo central es la instalación de una democracia pactada caracterizada por la subsistencia de “enclaves autoritarios”¹, los cuales hacían necesario/impedían manejar la política y procesar las diferencias de opinión al interior del sistema político y en el marco de una política de consensos (Garretón et al. 2011).

Esta configuración “cerrada” del sistema político en la transición y los compromisos de la “democracia pactada” conducen a dos mecanismos de desactivación del movimiento social. La Concertación de Partidos por la Democracia que gana las elecciones de

¹ Entre ellos, que el comandante en jefe del Ejército es Pinochet, una mayoría para la oposición de derecha por el sistema electoral y los senadores designados.

1989 proyectó la configuración dictatorial en lo que refiere a la relación sistema político-movimientos sociales, siendo la estrategia más relevante la desactivación de las organizaciones político-militares existentes hasta ese entonces. Este primer mecanismo de desactivación del movimiento social afectará también a los “movimientos de masas” que se habían opuesto a la dictadura, tales como sindicatos, pobladores y movimiento estudiantil. Respecto de estos últimos la lógica opositora operará no tanto en la inteligencia política y en las operaciones de contrainsurgencia, sino más bien en la figura de “resguardo del orden público” que legitimará la rápida represión de cualquier acción de protesta.

Una vez desmovilizadas las milicias y las organizaciones de masas, la relación sistema político-movimientos sociales funcionará con un mecanismo de cooptación y síntesis. Aquello se observa, por ejemplo, en la dirección de la CUT a cargo de dirigentes sindicales vinculados a la Concertación, así como en cierta hegemonía de las juventudes políticas de los partidos de gobierno en el movimiento estudiantil, lo que aseguraba la moderación de las demandas sectoriales y el resguardo de la arquitectura neoliberal de la sociedad instalada por la dictadura.

Sin embargo, será en la relación entre sistema político y los llamados “nuevos movimientos sociales” donde se expresará con mayor fuerza el mecanismo de integración y síntesis que definimos anteriormente. Los movimientos sociales de temáticas específicas que irrumpieron a principios de la década: mujeres, indígenas, derechos humanos y juveniles, transitaban sistemáticamente hacia una integración en la nueva institucionalidad a

través de la creación de subsectores públicos sectorializados (CONADI, SERNAM, INJUV, etc.). Esta operación da cuenta, al mismo tiempo, de toda una lógica gubernamental en el aparato estatal que sirve para mantener inalteradas las coordenadas de la política pública neoliberal instalada por la dictadura, para efectos de enfrentar y resolver las problemáticas sociales.

Recapitulando, durante la transición los movimientos sociales comienzan a moderar sus demandas y a circunscribirlas en el propio marco institucional autoritario, siendo el movimiento estudiantil el más afectado por este proceso, lo que implicó, incluso, un largo silenciamiento del activismo universitario que sólo vino a recuperarse hacia fines de la década del 90. Todo este proceso hizo perder peso en el imaginario al movimiento social, tanto en el plano político como en el académico, en desmedro de la ciudadanía y ciertos actores de la sociedad civil (Garretón et al. 2011). De esta manera, el sistema político, mediante la desmovilización, primero, y la integración, después, aseguró la despolitización de la sociedad civil al constreñir toda la actividad política en el sistema de partidos y las demandas de los actores sociales en el horizonte de la disputa gremial y “la medida de lo posible”.

Será el movimiento estudiantil, entrado el siglo XXI, mediante un lento proceso de reorganización y articulación de nuevos referentes y expresiones, el motor de una síntesis organizacional que desplegará nuevas formas de materializar la protesta y, por extensión, de interrogar la gestión de los conflictos sociales desde el sistema político. De modo ejemplar, podemos pensar en la emergencia de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes

Secundarios (ACES) como resultado de este profundo proceso de reorganización de los movimientos sociales en la postransición. En el mismo periodo, y a partir de reflexiones internas y reconfiguraciones organizacionales similares, aparece el movimiento de pobladores representados por la Asociación Nacional de Deudores Habitacionales (ANDHA) y la Confederación de Trabajadores Subcontratados del Cobre (CTC). Estos tres movimientos: estudiantil, de pobladores y de trabajadores, no sólo comparten un proceso interno similar, sino también un diagnóstico común respecto a la relación, acaso inexistente o al menos fuertemente instrumentalizada, con el poder ejecutivo y legislativo (Aguilera, 2012).

De esta forma, desde el año 2000 en adelante, ya no existirá, en lo central, esa imbricación entre movimientos sociales, estructuras partidarias y actores/organización social que había signado la historia política y social de Chile. Más bien, se comienza a producir movimiento social sin vasos comunicantes, o muy debilitados, con el sistema político. De allí que lo que definirá a los movimientos sociales desde inicios del nuevo siglo será la búsqueda de una nueva vinculación con la política, no mediada por los partidos ni inscrita en marcos regulatorios de participación ciudadana como aquellos que caracterizaron, hasta ese entonces, los modos de gestión de la relación gobierno-actores sociales. En otras palabras, la postransición se caracteriza por una separación entre “la lógica partidaria-gubernamental de la lógica movimientista” (Garretón et al. 2011: 116).

Lo ocurrido con los estudiantes secundarios movilizados el año 2006 quizás sea ilustrativo

de este proceso de reconstitución de actores y movimientos sociales. Tal como reflejan los documentos de la época, por ejemplo, la Propuesta de Trabajo de Estudiantes Secundarios de la Región Metropolitana (OPECH 2005), la subjetividad de los actores sociales, en general, y de los estudiantes secundarios, en particular, se encontraba tensionada al menos en tres dimensiones primordiales que constituyen a un movimiento social: la reubicación de organizaciones partidarias tradicionales con presencia en el mundo estudiantil y su relación con colectivos y agrupaciones políticas emergentes (carácter organizacional-interno), las características de la conexión con el campo de antagonistas y actores institucionales participantes de la arena de conflicto (relación con el sistema institucional), así como el sentido y el horizonte estratégico de las demandas en relación con la sociedad (Aguilera 2008). Por lo anterior, lo que definirá a los movimientos sociales en la postransición será “la búsqueda de una nueva relación con la política, básicamente la partidaria, caracterizada por una mucho mayor distancia y tensión, su relativa “especialización” en cada campo y por lo tanto la fragmentación” (Garretón et al. 2011: 117).

Más allá de la existencia o no de una fragmentación en los movimientos sociales, lo que nos convoca en este artículo es hacernos cargo, justamente, de la puesta en marcha de un proceso de politización en la sociedad chilena de los últimos años y sus impactos en términos del sistema político. Para ello, nuestra unidad de análisis se conforma por los procesos de movilización y repertorios de protesta utilizados en el periodo 2005-2012.

2. ¿Cómo pensar los movimientos sociales en Chile?

2.1. Perspectivas analíticas

Los análisis contemporáneos sobre movimientos sociales pueden ser agrupados alrededor de dos grandes perspectivas. Las primeras responden a preocupaciones de tipo interaccional y cultural, mientras que las segundas son de orden instrumental y procedimental.

Las perspectivas interaccionales (Melucci 1999; Laraña y Gusfield 1994; Pizzorno 1978) reivindican que la acción social será la resultante de un conjunto de procesos individuales y colectivos en que los sujetos se constituyen en actores sociales a partir de y en relación con otros sujetos que le otorgan sentido a las acciones propias y ajenas. Así, los movimientos sociales serían, por definición, estructuras inestables que invierten gran parte de sus “recursos” en mantener la estabilidad de sus sistemas de acción (Melucci 1999). Dentro de las perspectivas interaccionales sobre movimientos sociales se encuentran aquellas que enfatizan la dimensión “cultural” de su despliegue (Melucci 1999; Touraine 1990), y que se enfocan más bien en aquellas cuestiones simbólicas existentes en la sociedad, constituyéndose en los “percutores” de las prácticas movimientistas. Esta perspectiva ha producido herramientas conceptuales interesantes como las nociones de “significados de la acción” (Touraine 1990) y “sistemas de acción” (Melucci 1999). En esta dirección, los movimientos sociales son considerados, ante todo, como productores de significados colectivos o “profetas de su tiempo” que anuncian aquello que está por venir

(Melucci 1999), y desde dichas capacidades (auto)reflexivas vuelcan sobre la sociedad sus propuestas y aspiran a provocar determinadas transformaciones. Una deriva que ha venido cobrando relevancia en este contexto es aquella que otorga importancia, dentro de esta orientación cultural, a los procesos de constitución de identidades y adscripciones comunitarias (Della Porta y Mosca 2005; Castells 1999; Pizzorno 1978).

Las dimensiones de análisis de la perspectiva interaccional-cultural corresponden a los “aspectos cognitivos” de los movimientos sociales, donde lo central es la construcción de un problema o conflicto social. Como ejemplo, al revisar la movilización estudiantil del 2006 observamos cómo no bastaba tener una situación de injusticia evidente respecto a la calidad educativa entre instituciones públicas (ya estratificadas en su interior) y privadas, sino que además fue necesaria la constitución de una situación de “no reconocimiento generacional” de los estudiantes, cuestión que posibilitó una movilización sin precedentes en la historia social y política chilena. La otra dimensión de análisis de la perspectiva interaccional-cultural remite a los aspectos “afectivos” de los movimientos sociales: “comunidades emocionales”, “estados de eferescencia”, “sensibilidades”, “afectos”; estos tópicos cobran relevancia con la emergencia de los “nuevos movimientos sociales” (NMS: feministas, ecologistas, gays y lesbianas, etc.) que reivindican no sólo cambiar el mundo sino también la vida.

Dentro de este primer grupo encontramos un enfoque interaccional-identitario, abocado al análisis de los “mediadores”, “frames” (Goffman 2006) o “marcos” en la traducción de Gamson (1992), que remiten a los procesos

interpretativos mediante los cuales un sujeto le confiere (y se confiere) sentido al (y ante el) mundo social que habita, al sintetizarlo y simplificarlo a partir de complejos procesos de codificación. Esta conceptualización se traducirá en una preocupación por aquellos aspectos simbólico-discursivos de significación de la realidad social que desarrollan los movimientos sociales como forma de conformar comunidad y legitimar su accionar. En esta línea, sobresale la constitución de un “nosotros” en el cual reconocerse y de aquellos “otros” (antagonistas) ante los cuales movilizarse. Esta perspectiva ha ido dando paso a una preocupación no tanto por el “origen” de los movimientos, sino por los procesos que “sostienen” toda práctica colectiva, orientándose, por tanto, hacia aquellas cuestiones interaccionales, relacionales e identitarias que hemos señalado previamente. Esto evita focalizarse en algunos grupos de sujetos “predefinidos” que encarnarían en su praxis la prevalencia de estos procesos, sino más bien centrarse en todo movimiento social.

En la segunda perspectiva que hemos denominado instrumental-procedimental, encontramos tanto la teoría de movilización de recursos como la estructura de oportunidades políticas. Ambas enfatizan aquellas dimensiones racionales, y por ende objetivables, de las prácticas colectivas que emprenden los sujetos y que se despliegan en el marco de unas coyunturas o ciclos movilizatorios. En ambas direcciones teóricas, ya sea en los grados de apertura de los sistemas políticos, como en la capacidad inherente a los grupos y colectividades de provocar transformaciones en sus entornos más inmediatos, localizamos insumos conceptuales necesarios para el análisis de los movimientos sociales desde una perspectiva más bien instrumental (lo que se

aspira a conseguir: los objetivos), y expresiva (las modalidades empíricas específicas que adoptan las acciones colectivas).

Por una parte, la teoría de la movilización de recursos asume como dado el conflicto social: la sociedad se constituiría en su base en la oposición o contradicción de fuerzas sociales. Por otra parte, la acción colectiva de los movimientos sociales respondería más bien a su propia capacidad de activar y dinamizar públicamente ese sustrato conflictivo. Las dimensiones de análisis apuntan a la construcción de liderazgo, las formas y modalidades de movilización, los recursos económicos o materiales que se invierten en una movilización y el establecimiento de “familias de movimientos” (alianzas y articulaciones) como señala Tarrow (1997). Todos estos procesos dan cuenta de “estructuras de movilización” que pasan a formar parte de las unidades de análisis privilegiadas por parte de los teóricos que adscriben a esta perspectiva (McAdam 2002; Tarrow 2002; McCarthy y Zald 1973), esto es, las bases organizativas y los niveles de institucionalización y formalización de los movimientos sociales que les permiten unificar y utilizar recursos (Delgado 2005).

Finalmente, dentro de la perspectiva instrumental-procedimental encontramos la teoría de la estructura de oportunidades políticas. En esta mirada las dimensiones centrales corresponden al contexto sociopolítico, fundamentalmente al sistema político institucionalizado (gobierno y sistema de partidos), en tanto marco facilitador/obstaculizador de las acciones colectivas de los movimientos sociales. La pregunta que sobresale, entonces, es cómo se relaciona la política institucionalizada y la acción colectiva

desde el punto de vista de las oportunidades que ofrece el primero para el desarrollo de las segundas en un momento histórico (Fuentes 2006; Grimaldi 2006). Para responderla, este enfoque propone el concepto operativo de “oportunidad política” (Mc Adam et al. 1999), del que se desprenden distintas dimensiones/variables.

Una operacionalización útil para el caso latinoamericano es la que parte de la distinción entre sistemas políticos cerrados y abiertos (Favela Gabia 2002). Mientras los últimos se ajustan idealmente a algunas democracias liberales, en América Latina la composición de los sistemas políticos tiende a cerrarse a los movimientos sociales. En esta aproximación la perspectiva analítica de los sistemas políticos distingue variables de dos niveles: estructurales y coyunturales. Mientras el primer nivel concierne a rasgos estables, el coyuntural corresponde a elementos contingentes influidos, en última instancia, por el nivel estructural. Lo estructural se define por:

- 1. *Distribución institucional del poder entre las ramas y niveles de gobierno:* apunta a la relación entre los poderes del estado y la autonomía y libertad de cada uno para procesar las demandas del movimiento social. También destaca el grado de centralización del poder y la disponibilidad de puntos de acceso y de influencia de la ciudadanía en ámbitos locales:

en general, mientras más amplia es la definición de los derechos ciudadanos y más descentralizada es la distribución de poder político, mayor es el número de puntos de acceso, lo que aumenta las oportunidades para que la movilización popular se desarrolle y tenga éxito (Favela Gabia 2002: 98).

- 2. *Sistema electoral y de partidos:* remite a la efectividad del proceso electoral (disposición de los funcionarios públicos a la rendición de cuentas) y al grado de competitividad en el sistema de partidos (sistema de elección, número de partidos contendientes y su comportamiento electoral). En consecuencia, mientras más grande es el número de partidos y de oportunidades de los partidos locales, mayor es la posibilidad de que los movimientos sociales influyan en las decisiones políticas.

- 3. *Sistema de representación de los intereses:* esta variable se mueve en un *continuum* que va desde el pluralismo, donde la estructura de representación no está ordenada jerárquicamente ni hay monopolio sobre el reconocimiento oficial, hacia el polo “corporativista”, donde

la estructura de agregación de intereses es altamente comprehensiva, pero sólo en forma horizontal, dado que una sola asociación es la que se adjudica la representación de todos los grupos sociales (Favela Gabia 2002: 100).

- 4. *Leyes e instituciones relacionadas con la vigilancia y el control de las protestas:* se refiere a los rasgos institucionales, los códigos legales, la naturaleza del aparato judicial y los derechos de los acusados. Involucra la legislación y las instituciones de orden público, ámbito donde la diferencia entre sistemas políticos cerrados y abiertos estriba en que los primeros son “excluyentes” (represivos, confrontativos y paralizantes), y los segundos “integradores” (posibilitadores, cooperativos y asimiladores). En las variables de nivel coyuntural encontramos:

o a) *Disponibilidad de aliados poderosos*: depende de la heterogeneidad de la elite, así como de los realineamientos electorales. Los aliados poderosos son fundamentales para los movimientos sociales, dado que ayudan a neutralizar la oposición del sistema político hacia ellos. En los sistemas abiertos los movimientos sociales cuentan con un considerable número de aliados, debido a la distribución equilibrada del poder y a que los niveles de gobierno otorgan facultades a diversos actores políticos. En los sistemas cerrados la estructura política centralizada reduce la posibilidad de que ciertas ramas autónomas de gobierno apoyen a los movimientos sociales. En casos extremos, autoritarios, los movimientos sociales sólo encuentran aliados en el exterior (actores internacionales).

o b) *Realineamientos electorales*: incrementan las posibilidades de que surjan movimientos sociales y que aumenten sus oportunidades de éxito, puesto que las lealtades electorales se ven en entredicho y, en consecuencia, los partidos fijan su atención en los grupos sociales que pueden afectar los resultados electorales.

o c) *Cohesión de la elite*: cuando la elite está cerrada los movimientos sociales dependen únicamente de su fuerza. Al contrario, cuando se fraccionan y sus diversas facciones mantienen posturas opuestas, los movimientos sociales pueden encontrar aliados en la elite y provocar que estos últimos lleven recursos a los movimientos nacientes.

o d) *Estrategias predominantes para la resolución de conflictos*: esto es, concepciones explícitas o implícitas que surgen del proceso político. Dan lugar a dos tipos específicos de gestión de los conflictos, a saber, represivos o integradores:

las estrategias predominantes más tolerantes, selectivas y suaves favorecen la movilización social y fomentan las estrategias integradoras por parte de los movimientos sociales (cabildo, presentación de demandas, movilización electoral y partidista), mientras que las estrategias más represivas, difusas y duras tienden a desalentar las protestas masivas y pacíficas, a la vez que desencadenan los repertorios de lucha más radicales, orquestados fuera de los canales políticos establecidos y convencionales (por ejemplo, manifestaciones públicas, desobediencia civil, ocupación de instalaciones, bloqueos, violencia, etc.) (Favela Gabia 2002: 103).

En términos globales, nuestro análisis considera ambas perspectivas, interaccional-cultural e instrumental-procedimental, como un *continuum* entre el proceso complejo de constitución y acción colectiva del movimiento social y las formas de recepción que suscitan en el sistema político. Lo anterior se corresponde, a su vez, con procesos efectivos y distinciones teóricas que cristalizan distintos momentos de la dialéctica entre movimientos sociales y contexto sociopolítico. Dicho esto, y por razones de focalización, analizaremos en específico la relación que se produce entre la acción de los movimientos sociales, sus repertorios de protesta y el sistema político en general, bajo la perspectiva de las oportunidades políticas. Esperamos con ello contribuir a precisar las características del proceso de politización de la sociedad chilena.

2.2. El escenario actual: Oportunidades políticas de los movimientos sociales en el Chile postransicional

La transición política chilena se constituyó sobre un sistema político cerrado, con características autoritarias en varios niveles de su sistema político. Los movimientos sociales tuvieron nula o poca influencia, ya sea por estrategias de asimilación institucional o por desmovilización. A partir del 2005 la acción de los movimientos sociales: estudiantil, trabajadores subcontratados, deudores habitacionales, ecologistas, entre otros, han ido resquebrajando la clausura del sistema política respecto de la política extra institucional. Aun así, la democracia chilena sigue estando fuertemente cerrada. Pese a las transformaciones y reformas de los años posteriores en democracia, no se produce, en efecto, una “transición ejemplar”, sino que ésta da como resultado una “democracia incompleta” (Garretón et al. 2011).

La consecuencia de esta democracia incompleta, cerrada y sin puntos de acceso sustanciales a los movimientos sociales, es una creciente tensión entre éstos y el sistema político (Garretón, Cruz y Aguirre, 2012). Un ejemplo claro de esta tensión es la experiencia de los Consejos Asesores Presidenciales (CAP) que surgieron a raíz de multitudinarias movilizaciones sociales durante el primer gobierno de Bachelet (2004-2008). Dicho gobierno, que había prometido durante su campaña un “estilo participativo y ciudadano de hacer política” se vio enfrentado, a partir del 2006, a dos grandes movilizaciones, de estudiantes y trabajadores, que impulsaron la creación del Consejo Asesor Presidencial Trabajo y Equidad (CAPTE) y el Consejo Asesor

Presidencial para la Calidad de la Educación (CAPCE). Las tensiones estuvieron presentes desde el comienzo en términos de la elección de sus integrantes y la representación de distintos sectores en ellos (movimientos sociales y ciudadanos, *think thanks*, ONG, iglesias, académicos y partidos políticos).

El segundo nivel de tensión se expresó en términos de:

la confluencia parcial, a veces desequilibrada, de los tres componentes básicos de la matriz sociopolítica: el Estado (a través de los representantes de la tecno-burocracia pública), el sistema de partidos políticos (dirigentes y representantes políticos) y la sociedad civil (los diversos actores que participaron como consejeros o invitados a las audiencias) (Garretón, Cruz y Aguirre 2012: 335).

El tercer nivel de tensión, se vivió en que, más allá de ofrecer un experimento de una nueva relación entre estado, gobierno y sociedad, los CAP actuaron como “instancias donde las posiciones derrotadas por las movilizaciones pudieron legitimarse y reponer su poder e influencia” (Garretón, Cruz y Aguirre 2012: 330), es decir, actuaron como dispositivos de gobernabilidad destinados a dilatar, frenar y canalizar las problemáticas planteadas por las manifestaciones. Un caso patente es el del CAPCE, ya que el resultado de ese trabajo fue la desactivación del movimiento estudiantil y la relegitimación del sistema educativo imperante, perfeccionado en lo esencial el modelo vigente con la Ley General de Educación (LGE).

Para conducir el análisis de este trabajo hemos desarrollado una descripción parcial de la relación entre sistema político y movimientos sociales a partir de la evidencia que hemos revisado hasta aquí.

Tabla 1. Características del sistema político chileno en la postransición

Aspectos de la interacción entre los movimientos sociales y la sociedad	Nivel estructural	Nivel coyuntural
<i>Número y puntos de acceso al gobierno</i>	Nos encontramos con un modelo altamente restrictivo y centralizado, en el que muchas expresiones políticas de la ciudadanía quedan excluidas antes de participar.	El movimiento social ha ido acumulando numerosos y significativos aliados en el mundo académico, internacional y político.
<i>Importancia del proceso electoral como método de distribución del poder</i>	En Chile existe un proceso de gran estabilidad política institucional, fundamentada, en la práctica, por una política de consensos entre el Gobierno y la oposición.	El mejor indicador al respecto es la existencia de un sistema electoral binominal que favorece la existencia de grandes bloques, donde no existe proporcionalidad en la representación política. Si bien en la agenda está instalada una reforma al sistema electoral, su profundidad y efecto no es claro.
<i>Participación de las organizaciones sociales en los procesos de toma de decisiones</i>	Al encontrarnos en un sistema político altamente “endógeno”, las posibilidades de la clase política de desarrollar acuerdos con sectores ciudadanos para emprender determinados proyectos son prácticamente inexistentes.	La experiencia de constitución del Consejo Asesor Presidencial (CAP) demuestra que éste se ha movido en la lógica de desactivación del movimiento social.
<i>Vigilancia y control de la protesta</i>	La historia política reciente ha permitido una forma de relación que privilegia la estabilidad antes que el conflicto, por tanto, la gestión lógica de los movimientos sociales es la represión. En esta dirección, destacan figuras del tipo “alteración del orden público”, ley de seguridad interior del Estado, ley antiterrorista, garantías de las fuerzas policiales para la detención arbitraria.	En los últimos años se ha observado una mayor apertura en cuanto a autorizar movilizaciones callejeras (marchas, actos públicos, etc.), aunque se mantiene y se permite a la policía intervenir, detener o disolver cualquier manifestación (autorizada o no) que a juicio de la autoridad política y de seguridad atente contra el normal funcionamiento del país.

Fuente: elaborado por los autores replicando el cuadro diseñado por Favela Gabia (2002).

3. Metodología: Origen de los datos y método de análisis

3.1. Fuentes

Este artículo utiliza datos sobre conflictos sociales en Chile, los cuales fueron extraídos y agrupados a partir de los informes de cronología mensual del conflicto social en Chile, que es parte del Observatorio Social de América Latina (OSAL), organización dependiente del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). La cronología mensual del conflicto social es el instrumento diseñado por el OSAL, que se aplica mes a mes en 19 países de América Latina y el Caribe para llevar a cabo el monitoreo y el registro de conflictos sociales. OSAL ha conformado una red institucional de Comités de Seguimiento, Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura Latinoamericana que funcionan en cada país.

El trabajo del comité chileno consiste en el relevamiento y la sistematización mensual de conflictos sociales a partir de fuentes periodísticas de circulación masiva. Los periódicos, tanto en formato impreso como digital, son: La Nación, El Mercurio y La Tercera. La información recolectada es complementada –según criterios de relevancia– con la revisión de diarios de menor circulación (normalmente digitales) tales como: El Mostrador, El Siglo, Punto Final y Azkintuwe. También se consideran páginas web como Comunicaciones OLCA, Identidad Lafkenche, Liberación, Mapuexpress, Observatorio Ciudadano, entre otros².

² Cada informe mensual consigna las fuentes utilizadas: <http://www.clacso.org.ar/institucional/1h1.php?idioma=>

3.2. Usos y limitaciones de los datos construidos por OSAL

La metodología de monitoreo de medios de prensa introduce limitaciones en la posibilidad de inferencia y generalización del dato construido. Tanto las muestras seleccionadas (medios de prensa), como el relevamiento de noticias relativas a conflictos sociales involucran, inevitablemente, sesgos que pueden conducir tanto a la sobre-representación como a la sub-representación de éstas. Los conflictos sociales tienen intensidades y una historicidad que no siempre es captada por los medios de comunicación, sobre todo aquellas emplazadas en comunidades de poca población. Al respecto, el investigador Fernando Calderón (2012), quien estudia el fenómeno de la protesta social en América Latina a partir del monitoreo de prensa, hace una lectura clara de las limitaciones de su trabajo para el PNUD y del trabajo de la OSAL. Por su parte, investigadores como Seoane y Taddei señalan que:

La recolección de la información a partir del seguimiento cotidiano de fuentes periodísticas nacionales de los países considerados plantea sin duda una primera limitación, difícil de superar por estar relacionada con el tratamiento de los conflictos por parte de los medios de comunicación (2000: 63).

Se debe, entonces, considerar el fenómeno de “invisibilidad social” del conflicto como proceso, y de su deshistorización por parte de los medios. Como señala el Observatorio Social de América Latina (OSAL):

ya sea a través de la censura lisa y llana de ciertos conflictos o por un abordaje segmentado y fragmentante, que podríamos denominar como ‘ocultar mostrando’”, se disuelve la historicidad de los

procesos sociales. Así, en el tratamiento mediático estos conflictos aparecen, en la mayoría de los casos, como hechos aislados, sin antecedentes históricos y sin inscripción temporal y social, dificultando la comprensión de las continuidades y rupturas en las que se inscriben (Seoane y Taddei 2000: 62).

Dicho lo anterior, el uso correcto de los datos construidos por OSAL entrega información valiosa acerca de la construcción social del conflicto social (actores, antagonistas, demandas, repertorios). Su interpretación debe considerar la intertextualidad de los datos, y sus referencias de segundo y tercer orden respecto del evento conflictual tal y como se desarrolla en la realidad. Se debe evitar la interpretación ingenua de los datos producidos, que siempre se filtra desde la hegemonía epistemológica cuantitativa. Los medios muestran y ocultan aspectos en función de los intereses e ideologías de cada uno. Esto, lejos de constituir una objeción para la utilidad de los datos, constituye una riqueza enorme para su comprensión.

3.3. Datos construidos para el presente estudio

Se revisaron 982 páginas de informes que corresponden a la cronología mensual comprendida entre los años 2005-2012³. La selección de este rango temporal responde a un criterio sustantivo: a partir del 2005 se inaugura un nuevo ciclo de movilizaciones en el país (Aguilera 2012). El número total obtenido es de 1854 conflictos sociales en todo Chile entre los años 2005-2012.

³ Los informes para los años 2005 y 2006 agrupan de 3 a 4 meses en cada informe. Para el año 2012 no están disponibles los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

El procedimiento de sistematización y tabulación de la información consignada en las cronologías mensuales operó en dos direcciones: a) inductivo, en función de las características del dato consignado en el informe (detallado previamente), y; b) deductivo, desde el punto de vista de las dimensiones del conflicto social que se querían explorar. Las variables y las categorías se construyeron, así, en una suerte de operacionalización dialéctica.

3.4. Operacionalización del conflicto social en Chile

Distinguimos tres dimensiones que resultan relevantes para entender el conflicto social en Chile:

- 1) *posición social del actor*
- 2) *procedimientos y estrategias*
- 3) *construcción social del conflicto*

Las categorías resultantes remiten a los datos aportados por los informes de la OSAL y, en ese sentido, representan a los actores en conflicto que hay en Chile. Esto implica que hay características y especificidades de la realidad chilena que llevan a la conformación de determinados actores sociales y a la ausencia de otros que sí están presentes en el resto de los países de América Latina.

La lógica que hay detrás de esta operacionalización es que el actor social se crea en el conflicto: se agencia en la experiencia de movilización, pues es allí donde se convierte en sujeto social. En consecuencia, su identidad está constituida con referencia a una alteridad que hemos llamado antagonista, aquello

que Calderón (2012) ha denominado “actor demandado”, esto es, la institución, grupo u organización social hacia quien se dirige

una medida de presión particular. Así, actor y antagonista son el eje de cualquier conflicto social: existen en el conflicto.

Tabla 2. Dimensiones del conflicto social en Chile

Dimensión	Definición	Subdimensión	Categorías
<i>Posición social del actor</i>	Coordenadas donde los medios ubican al actor en conflicto en términos de las relaciones sociales donde éste se inserta: de clase, políticas, étnicas, sexuales, valóricas e ideológicas. La identidad atribuida a ese actor social se deriva del ámbito en disputa y, en consecuencia, en contra de quienes se activa dicha disputa.	Lugar del conflicto	Comuna
		Tiempo del conflicto	Fecha de inicio
			Fecha de término
		Actor en conflicto	Trabajadores
			Estudiantes
			Indígenas
			Organizaciones gremiales/patronales/terratenientes
			Activistas urbanos
			Comunidades territoriales/campesinas
			Colegios profesionales
		Movimientos religiosos	
		Organización política	Específico
		Antagonista del actor en conflicto	Autoridades de gobierno y Estado
			Poder legislativo
Poder judicial			
Sector privado/empresas privadas/empresas del Estado/industria			
Gobiernos e instituciones extranjeras/instituciones internacionales			
Indígenas			
Trabajadores			
Estudiantes			
<i>Procedimientos y estrategias</i>	Incluye tanto los canales y las vías de presión que los actores sociales escogen y ejecutan dentro de un repertorio de protestas disponibles, como los modos de gobernabilidad que el Estado y la empresa privada desarrolla para gestionarlos.	Repertorios de protesta	Acciones que ponen en riesgo la propia vida
			Manifestación
			Intervención comunicativa
			Huelga
			Acciones confrontativas
			Expresión simbólica: artística/religiosa
			Internacionalización
		Modos de solución del conflicto	Judicialización
			Gestión ejecutiva
			Uso de fuerza pública
			Gestión parlamentaria
			Gestión privada

<i>Construcción social del conflicto</i>	Ámbito en el que se coloca la interacción actor-antagonista, resultado tanto de la acción del actor y del antagonista, como del recuento que de ello dan los medios.	Escenarios del conflicto	Marco normativo valórico
			Derechos sociales
			Étnico
			Gremial
			Ambiental/ecológico
		Tipo de demanda	Específico acotado
			Transformación política
Transformación radical del orden socio-político			

Fuente: elaboración propia.

La misma lógica del actor que se constituye al mismo tiempo que construye su antagonista conflictual se reproduce respecto de las acciones que ambos polos desarrollan para enfrentar el conflicto. En otras palabras, las acciones de presión desarrolladas por el actor en conflicto producen sus modos de gestión. Esto, por supuesto, no refiere a la performatividad de la acción de protesta, sino al historial de ajuste y adaptación que el Estado y la empresa privada han desarrollado a lo largo de la historia de conflictos sociales que se han enfrentado en Chile.

Respecto de las categorías para repertorios de protesta, hemos llegado a un diseño similar al propuesto por Calderón (2012). La idea es construir categorías de protesta social que indiquen diferenciales de violencia. Así, en un extremo de la lista, hemos decidido utilizar la etiqueta acciones confrontativas (Calderón 2012) para referir al uso de medidas radicales de protesta, atentados incendiarios y explosivos, ataques armados y saqueos. En el otro extremo de la lista están las declaraciones públicas, las denuncias y los comunicados, aquello que queda en el orden comunicativo y que aquí se ha etiquetado como acción declarativa. Bajo

la etiqueta de ‘manifestación’ hemos colocado aquellas acciones clásicas de protesta social, que son consideradas como derecho de expresión y ampliamente toleradas: paros, marchas y concentraciones. Adicionalmente, consideramos que las expresiones simbólicas, artísticas y religiosas que son ejecutadas para protestar constituyen repertorios de no violencia.

Hemos definido como huelga aquellos repertorios que suponen, de parte del actor en conflicto, la impugnación de un derecho público o privado atribuido al antagonista, esto es, tomas y ocupaciones de instituciones públicas, centros de producción y lugares de trabajo. Además de la internacionalización (exposición del conflicto ante órganos de derecho extra nacionales), aparece en Chile un repertorio difícil de etiquetar y definir, pero muy frecuente y relevante, que hemos denominado acciones que ponen en riesgo la propia vida. Remiten en particular a las huelgas de hambre, pero también al quemarse a lo bonzo o escalar alturas peligrosas. Todas estas acciones se sitúan en el ámbito de lo espectacular, suponen la exposición del riesgo y la atribución de responsabilidad al antagonista, y su actitud intransigente respecto de cualquier tragedia que pudiera suceder.

Los modos de solución del conflicto constituyen mecanismos de gestión institucionalizados por el Estado, empresas e intuiciones privadas para procesar conflictos sociales. Remiten a los distintos poderes del Estado, a su capacidad legítima de ejercer la coerción, así como de los mecanismos privados para solucionar conflictos.

La variable escenario del conflicto busca dar cuenta del modo en que éstos se posicionan mediáticamente en Chile. Para construir nuestras categorías replicamos el procedimiento inductivo-deductivo señalado más arriba, y revisamos las categorías presentadas por Calderón (2012). También utilizamos las caracterizaciones de los conflictos desarrolladas por el Comité de Seguimiento, Análisis del Conflicto Social y la Coyuntura en Chile⁴.

Hay unas precauciones a tener en cuenta en este punto. Hay actores sociales y escenarios del conflicto fuertemente correlacionados, sobre todo en los pares indígena-étnico, trabajadores-gremial y estudiantes-derechos sociales. Ahora bien, estas variables son relevantes al momento de cruzarlas con otras del tipo año del conflicto, duración del conflicto, antagonista del conflicto, acciones de protesta ejecutadas y alcance del conflicto. Además, cada evento conflictual puede exhibir más de un escenario de conflicto atribuido, hasta dos. Esto por lo general se da cuando concurre más de un actor social a un evento conflictual, y cuando éste se prolonga en el tiempo.

Las categorías de la variable alcance del conflicto son ordinales. Van desde una menor radicalidad y transformación de la demanda a una mayor. Ese dato se obtuvo de la intención declarativa explícita del actor social. Cuando la información presentada por OSAL no entregaba antecedentes al respecto, el caso quedaba vacío en esa variable.

4. Análisis

4.1. Modelo de análisis

Los datos disponibles en los informes del conflicto social en Chile (OSAL) nos han permitido seleccionar un ciclo de movilización sustantivo de la postransición que comprende los conflictos sociales desarrollados entre los años 2005 y 2012. Del análisis de esos datos obtuvimos dimensiones a partir de las cuales exploramos la politización de la sociedad chilena en dos niveles: la estructura de los movimientos sociales, y la estructura de oportunidades políticas.

Respecto a la estructura de los movimientos sociales, ella se compone de tres indicadores. Primero, la acción de los movimientos sociales, esto es, la frecuencia de las movilizaciones y los tipos de protesta ejecutadas en ellas. Segundo, la composición de los movimientos sociales, a saber, los actores que participan en ellos y los escenarios de conflicto que se construyen en los medios de comunicación a partir de su acción. Tercero, el alcance o radicalidad política de las demandas que emergen de esos conflictos. Estos tres indicadores permiten explorar la construcción de lo político en Chile a partir de la acción de los movimientos sociales: qué es políticamente posible, qué se puede demandar

⁴ Conflicto mapuche y conflicto indígena, conflictos educacionales, económico-sociales, laborales, político-sociales, medioambientales, socio-civiles y empresariales. Esta clasificación se consigna en el informe del periodo 2009-2010 pero tiene problemas de consistencia, razón que probablemente explique su desuso para el informe del periodo 2011-2012.

y cómo. A su vez, orientan la respuesta sobre qué ocurre con las máximas de “estabilidad”, “consenso” y “medida de lo posible” que se instalaron en el imaginario de los movimientos sociales durante la transición.

El segundo nivel de análisis corresponde a la estructura de oportunidades políticas y al sistema político. El indicador construido en esta dimensión tiene que ver con las estrategias con las cuales el aparato institucional resuelve los conflictos: si busca incluirlos al sistema político y así gestionarlos, o bien, si tiende a reprimirlos para sofocarlos.

Este modelo de análisis, que integra la estructura de los movimientos sociales y las oportunidades políticas que éstos encuentran en la institucionalidad, arroja unos indicadores empíricos para discutir la politización de la sociedad chilena. El ciclo de movilización analizado permite observar esas continuidades/disrupciones en ambos niveles. Nuestra hipótesis es que el ciclo de movilizaciones quiebra el modelo de integración entre movimientos sociales y sistema político instalado en la transición, y que en ese desajuste están las claves para aproximarse a la politización referida.

4.2. La estructura de los movimientos sociales en la postransición: Actores, alianzas y prácticas de protesta

Según los datos de la cronología del conflicto social en Chile (OSAL), entre los años 2005 y 2012 se registraron 1852 eventos conflictuales. Cada evento conflictual se identificó con un lugar, tiempo y duración en que N actores (de distinto tipo) ejecutan N acciones de protesta

(de un repertorio disponible) que se dirigen a N antagonistas (del sistema político y privado) que activan N modos de procesamiento (de gestión o representación) de los conflictos⁵.

Lo primero que observamos es que durante este ciclo la cantidad de eventos conflictuales se acrecienta, es decir, en términos del origen de los datos, la conflictividad social se va instalando con fuerza en los medios de comunicación y en la prensa. Para facilitar la lectura de esta evolución (y la de los demás indicadores), agrupamos bianualmente⁶ cuatro momentos del ciclo de movilización, que se corresponden de ciertos cortes sustantivos o etapas, y de la distribución de los datos.

De esta manera, la distribución de los eventos conflictuales es la siguiente: 2005-2006 registra un 18% de los eventos conflictuales; 2007-2008 registra un 28% de los eventos conflictuales; 2009-2010 registra un 18% de los eventos conflictuales, y; 2011-2012 registra un 36% de los eventos conflictuales. Salvo entre el 2009 y 2010 (probablemente debido al contexto electoral), la tendencia durante este ciclo es que los eventos conflictuales aumentan. Este aumento de la conflictividad social no es sólo cuantitativo, relacionado con la frecuencia de dichos eventos, sino también cualitativo. Esto se explica porque, en primer lugar, en la medida en que aumentan los eventos conflictuales, hay más tipos de actores involucrados en ellos. Esto quiere decir que el aumento de la conflictividad se vincula con un aumento en las alianzas entre

⁵ Cada caso tiene esta característica por origen periodístico. El caso corresponde al evento conflictual en torno al cual el periodista vincula tipos de actores, repertorio de acciones de protesta ejecutadas, escenarios mediatizados de conflicto y sus alcances políticos.

⁶ En todo el periodo analizado, se ejecutaron 2245 acciones de protesta, en un total de 1852 eventos.

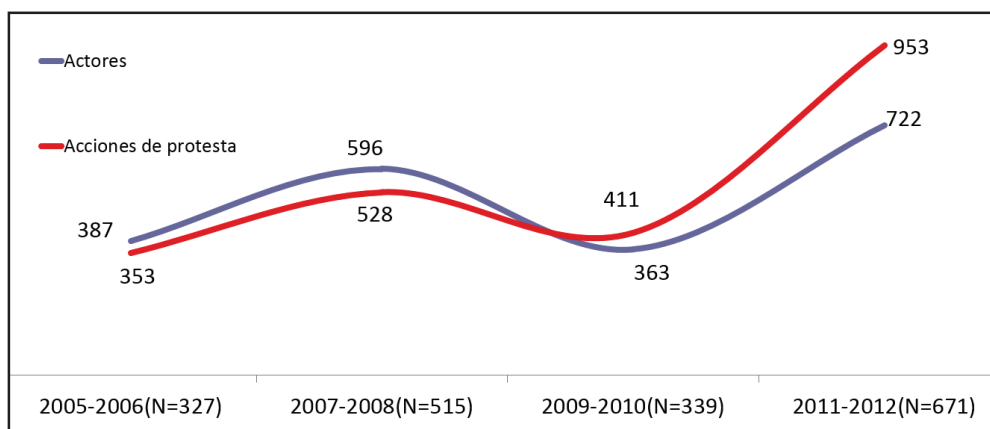
distintos actores que concurren a un mismo evento. En 1852 conflictos se contabilizan 2191 actores participantes. Por ejemplo, la alianza entre trabajadores, estudiantes y colegios profesionales se transforma en una modalidad recurrente durante todo este ciclo, y alcanza especial intensidad en la última etapa analizada, 2011-2012, donde se contabilizaron 671 eventos conflictuales en los que participaron 722 actores.

En segundo lugar, mientras más tipos de actores participan en un evento conflictual, más se diversifican las acciones de protesta ejecutadas en él. Por ejemplo, si trabajadores, estudiantes, o indígenas ejecutan un tipo de protesta cuando se movilizan solos, cuando construyen alianzas se ejecutan más acciones de protesta en ese evento. De hecho, los datos del ciclo de movilización muestran un fenómeno muy interesante: en las primeras dos etapas hay más actores que acciones de protesta ejecutadas en cada evento conflictual. Esto se debe a que, en una gran cantidad de ellos, hay un solo actor por

evento conflictual. Sin embargo, en la tercera etapa que es de repliegue del movimiento social, la relación se invierte: hay más tipos de acciones de protesta que tipos de actores participantes (ver Gráfico 1). En este sentido, se produce una racionalización de los recursos. En cada evento conflictual los actores despliegan todos los tipos de acciones de protesta posibles. Este proceso se observa con claridad en la etapa final del ciclo, donde aumentan todos los factores considerados, la cantidad de conflictos y los actores participantes, al tiempo que el repertorio de acciones de protesta muestra una notable diversificación.

Otra manera de graficar el efecto multiplicador de los ciclos movilizadorios tiene que ver con la relación entre acciones ejecutadas y los alcances políticos del conflicto. En tanto aumenta el número de acciones ejecutadas (lo que está asociado al número de actores participantes), el horizonte de la política también se expande.

Gráfico 1. Actores y acciones de protesta durante 2005-2012



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Cronología del Conflicto Social en Chile (OSAL), años 2005-2012.

En síntesis, desde el punto de vista de los recursos movilizados en los eventos conflictuales, se evidencia un uso cada vez más eficiente. Los actores buscan alianzas y realizan protestas conjuntas. A su vez, las alianzas permiten que se desarrollen más acciones de protesta en un mismo evento. Todo esto genera una enseñanza que va fortaleciendo la acción de los actores sociales a tal punto que, y esto es importante, se transforman en movimientos sociales. Esta transformación de actores en movimientos nos parece coherente con la interpretación que desarrollamos de los datos en virtud de su origen periodístico. Los medios hablan de los movimientos sociales cuando éstos han agenciado manifestaciones robustas, en cuanto a su frecuencia y su duración, las alianzas y las acciones de

protesta ejecutadas (ver Gráfico 2). Desde esta perspectiva, podemos observar un cambio en las lógicas de visibilización-invisibilización de los eventos conflictuales y de la protesta.

Respecto de la distribución de actores en el ciclo de movilizaciones, son cuatro los actores significativos: estudiantes, trabajadores, indígenas y activistas urbanos. Los estudiantes aumentan en términos absolutos y como proporción respecto del total de eventos conflictuales del último periodo. Los actores urbanos mantienen una proporción similar. En las etapas centrales, los trabajadores alcanzan su punto más álgido relacionado con las movilizaciones de los trabajadores subcontratados del cobre (ver Gráfico 3).

Gráfico 2. Acciones de protesta durante 2005-2012

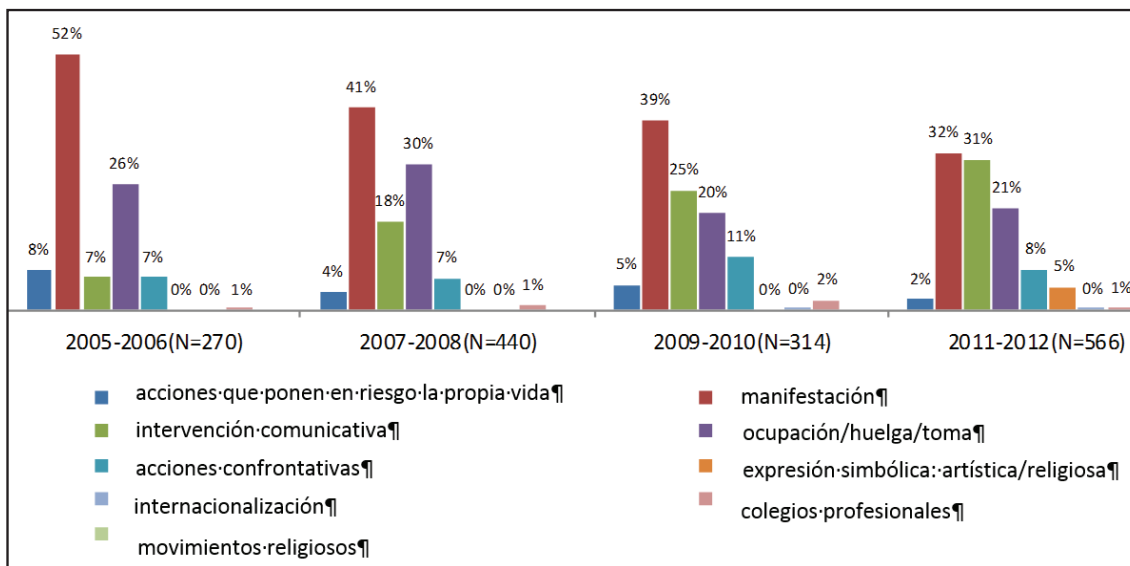
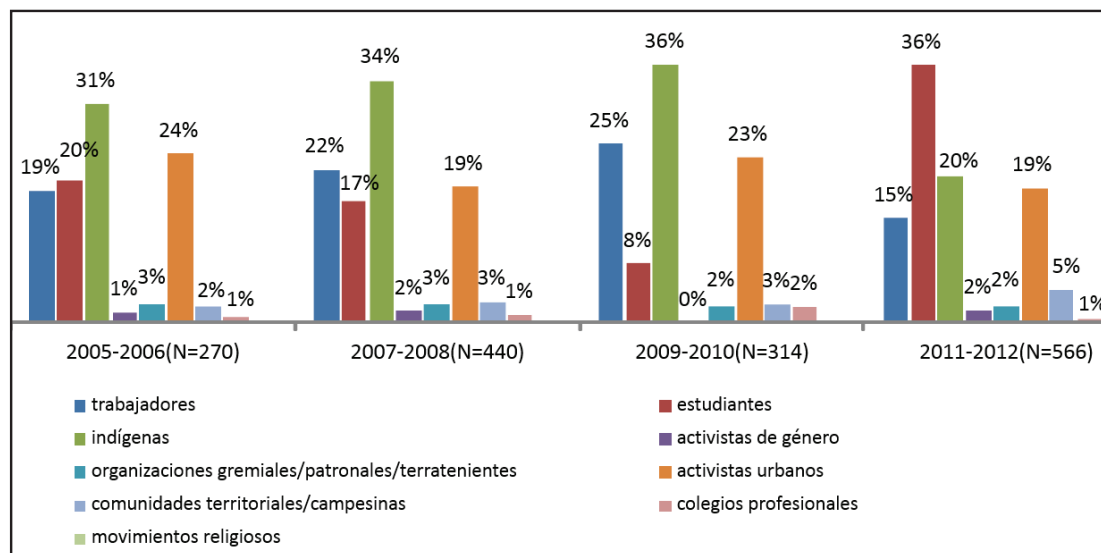


Gráfico 3. Actor (por sí solo) durante 2005-2012



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Cronología del Conflicto Social en Chile (OSAL), años 2005-2012.

4.3. Lo políticamente posible según los movimientos sociales

En la sección anterior observamos cómo la movilización social se ha ido fortaleciendo en el ciclo analizado. Esto ha sucedido en función de dos factores: por un lado, más actores concurren a protestar al mismo evento y, por otro lado, ejecutan más y más variadas acciones de protesta en ellos. En esta sección intentamos responder las siguientes preguntas: ¿cómo influye el aumento de factores propios de la movilización social en los discursos de los manifestantes? ¿Mantienen los marcos normativos definidos en la transición, en que la acción política se orienta a la estabilidad institucional, el consenso legislativo, la autocontención y moderación de los planteamientos transformadores?

Para explorar esta dimensión hemos construido dos indicadores, el primero de los cuales refiere al alcance del conflicto. Como ya mencionamos, las categorías de esta variable son ordinales: van desde una menor radicalidad y transformación de la demanda a una mayor. Estos datos se obtuvieron de la intención declarativa explícita del actor social. El alcance específico acotado apunta a un arreglo particular donde intervienen sólo los actores en conflicto, quienes persiguen un objetivo concreto cuya solución le beneficia exclusivamente.

Las movilizaciones se articulan, fundamentalmente, en torno a alcances específicos acotados. Sin embargo, en los momentos de mayor movilización, primera y cuarta etapa, el objetivo de transformación política aumenta, es decir, se avanza hacia transformaciones

complejas que involucran argumentos más elaborados como definiciones del Estado, leyes, cambios de una política pública, etc.

Esto es especialmente evidente entre el 2011 y el 2012, donde esta última categoría alcanza un 44% de los eventos conflictuales. Aquello muestra una evolución en términos de que las máximas de la transición, consenso, estabilidad y moderación, ya no son internalizadas por los movimientos sociales. Por tanto, los alcances de la movilización derivan en una mayor radicalidad, así como en una protesta que – dado el aumento de sus factores- se vuelve más robusta, constriñendo a los medios para que reporten/visibilicen estas declaraciones políticas. Entonces, ya no es tan fácil despolitizar

mediáticamente. Los atributos de desorden, caos y terrorismo con que eran etiquetadas las movilizaciones en la transición, dan paso a un proceso de negociación y disputa por los significados/rótulos que las protestas van adquiriendo, de modo que la transformación política estructural emerge como una intención legítima. Todo sucede como si el aumento de eventos conflictuales expandiera la radicalidad y la profundidad de las demandas planteadas. Con ello, se amplía el horizonte de expectativas de los actores movilizados (ver Gráfico 4).

El aumento del número de actores en una movilización tiene el efecto de ampliación del alcance político (ver Gráfico 5). Aunque en la muestra son menos casos (en la mayoría hay

Gráfico 4. Alcance del conflicto durante 2005-2012

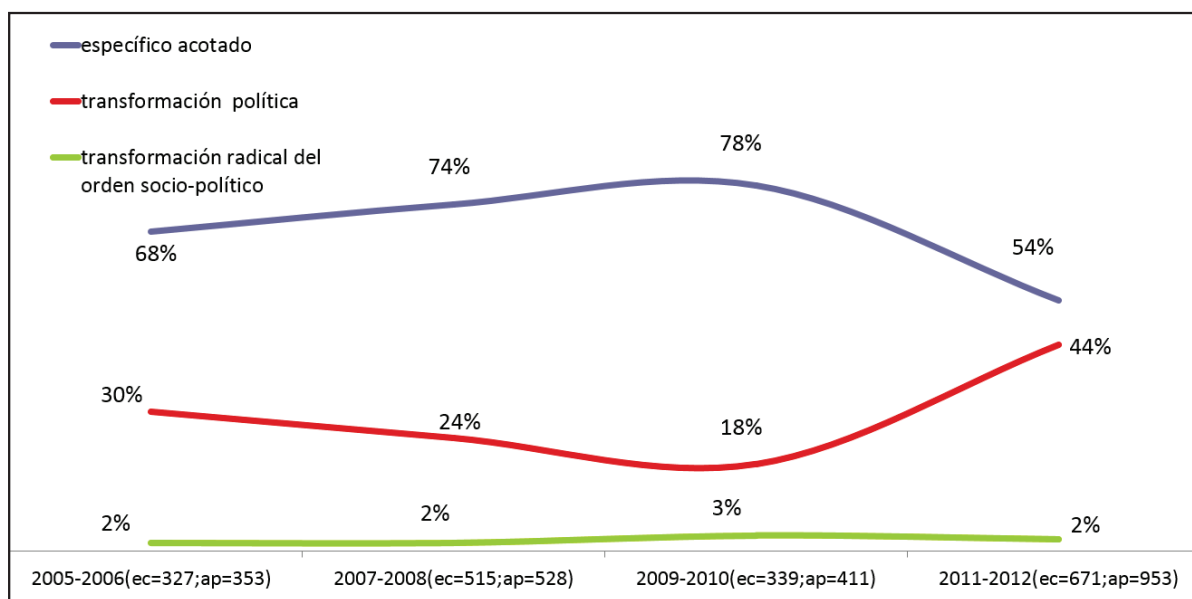
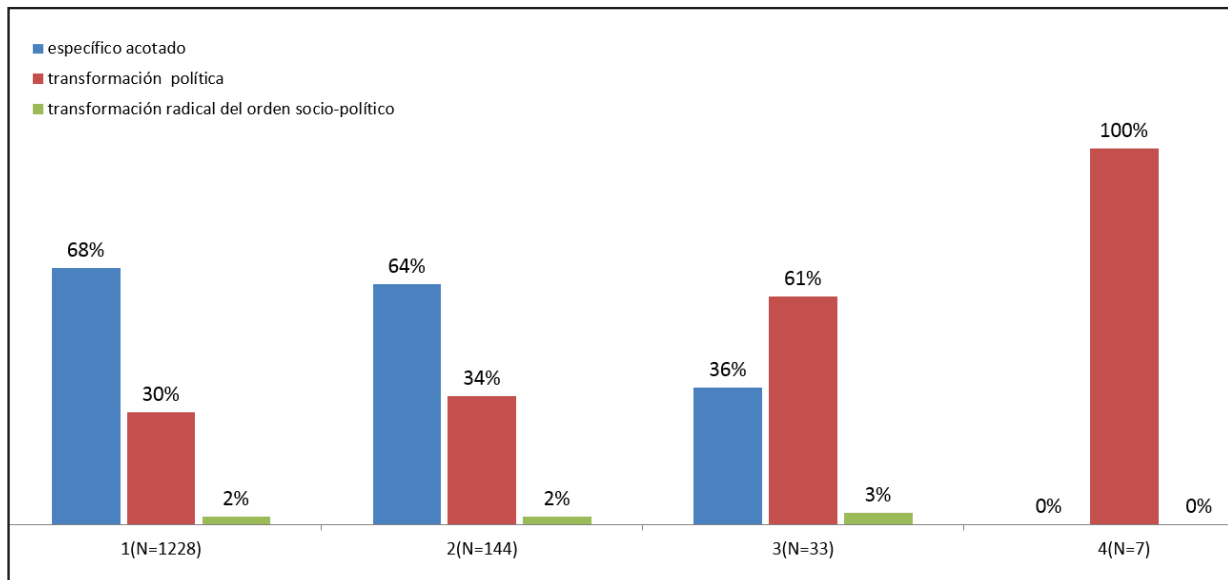


Gráfico 5. Alcance del conflicto según número de actores participantes durante 2005-2012



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Cronología del Conflicto Social en Chile (OSAL), años 2005-2012.

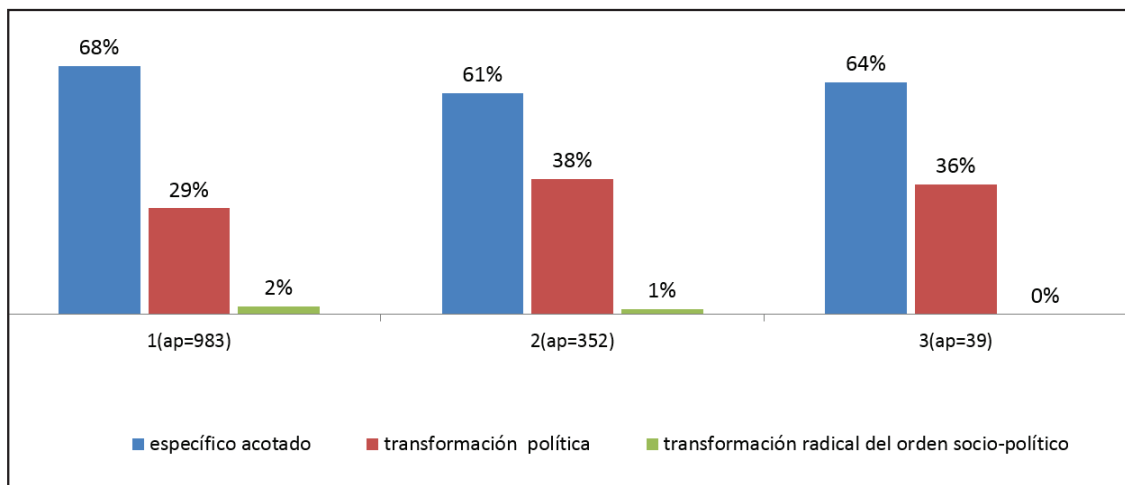
sólo un actor participante), las articulaciones y las alianzas desplazan la intencionalidad política hacia una mayor radicalidad. Hay una suerte de economía de escala en las protestas que hace que su crecimiento (en términos de la cantidad de movilizaciones y de los actores involucrados) produzca aumentos en todos los demás factores, incluida la intencionalidad política de las acciones de protesta (ver Gráfico 6), es decir, el alcance de las demandas que estos conflictos visibilizan.

Cabe referir la presencia marginal de aquellos eventos conflictuales que procesan alcances de tipo transformación radical del orden socio-político (movimientos revolucionarios armados, grupos antisistémicos, etc.). Este tipo de actividad política suele estar al margen

también de los ciclos de movilización que sacuden al grueso de la población chilena, no obstante, parecen beneficiarse del aumento de la conflictividad general.

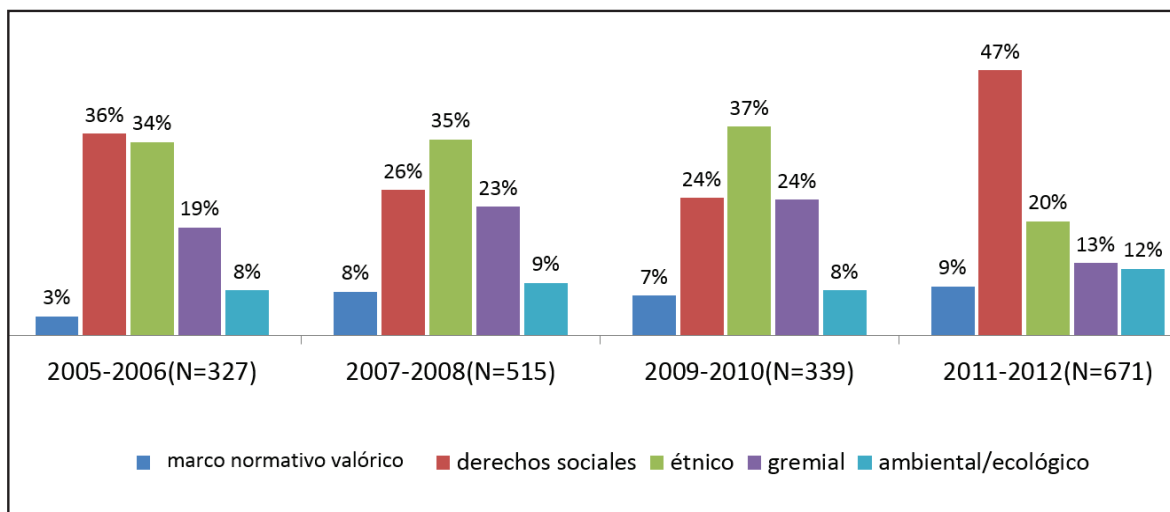
El segundo indicador que empleamos para analizar las transformaciones de lo políticamente posible –en tanto resultado del ciclo de movilizaciones– es el de escenario de conflicto (ver Gráfico 7), el que se desprende de la reconstrucción del evento conflictual que realizan los medios de prensa. Dichos escenarios constituyen significantes en disputa donde caben los actores, el sistema político y la forma en que los distintos medios de comunicación, con sus diferentes impactos y líneas editoriales, pujan para introducir los aspectos que cada uno considera relevantes.

Gráfico 6. Alcance del conflicto según número de acciones de protesta ejecutadas por conflicto durante 2005-2012



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Cronología del Conflicto Social en Chile (OSAL), años 2005-2012.

Gráfico 7. Escenario del conflicto durante 2005-2012



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Cronología del Conflicto Social en Chile (OSAL), años 2005-2012.

Lo que se observa con claridad en los gráficos precedentes es que en Chile se han ido instalando distintos escenarios de conflicto. En la primera etapa, coronada por la revolución pingüina, vemos que los derechos sociales se encumbran sobre los conflictos gremiales (que en términos del indicador anterior corresponde a las movilizaciones con alcance específico acotado). Durante las primeras tres etapas, se observa cómo los medios informan acerca de un escenario de conflicto étnico que enfrenta a mapuches y chilenos. Esto es una muestra de cómo los medios constriñen una protesta robusta de estas características en función de cómo observan/comunican dichos conflictos. La construcción de un escenario étnico habla de cierto éxito del movimiento indígena, en tanto se ha empeñado, contra la intención del gobierno y de los empresarios, en sostener que se trata de un conflicto entre pueblos distintos.

Finalmente, se observa cómo la etapa de mayor movilización, correspondiente al tramo 2011-2012, conduce a una semantización de las demandas sociales que originan los conflictos bajo la etiqueta de los derechos sociales. En este punto, derecho social tiene un excedente de significación con el cual se cubren esas demandas, las cuales, en otro lugar y tiempo, pueden aparecer en el ámbito privado, gremial, etc. En este sentido, se evidencia un proceso político general de recuperación de lo público.

4.4. Las oportunidades políticas de los movimientos sociales

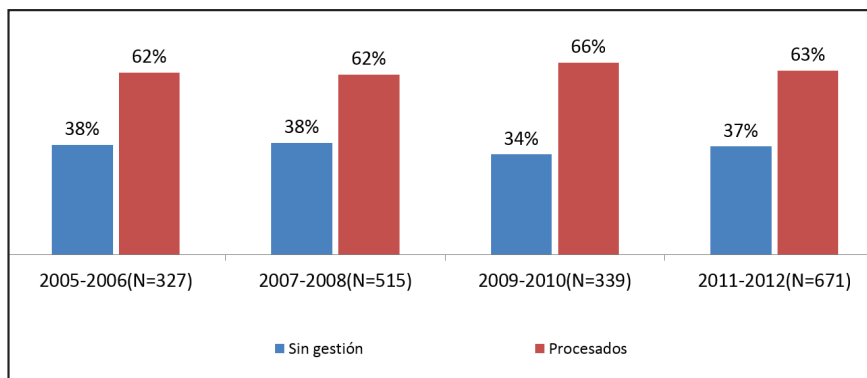
Según la metáfora que circula con fuerza en la actualidad, la barrera de lo posible se ha desplazado por la acción de los movimientos sociales. En esta sección buscamos responder

¿cómo ha reaccionado el sistema político a estos cambios internalizados por la ciudadanía? ¿Se ha abierto a los movimientos sociales, o sigue operando una lógica cerrada-represiva que quiere restringir al poder ejecutivo y al parlamento lo político y su discusión?

El primer indicador que construimos para analizar este aspecto es si existe o no reacción a los movimientos sociales. Lo que muestran los datos es que el sistema político chileno se mantiene estable, como si se tratara de una característica endémica del mismo. Por un lado, un porcentaje significativo de los conflictos se mantiene sin respuesta. Por otro lado, en torno al 60% son procesados de alguna manera (ver Gráfico 8). Hay que recordar que en este punto no estamos evaluando el tipo de procesamiento de los conflictos, el que va desde la gestión e integración para buscar soluciones a la represión. En suma, no hay oportunidades políticas para que se procesen las demandas de los actores políticos. El sistema político opera en una lógica de “no escucha” de los conflictos sociales. La distribución según tipo de actor de la gestión de conflictos muestra que ésta aumenta según la frecuencia y la cantidad de acciones de protesta ejecutadas, esto es, la fuerza que alcanza cada uno en el ciclo considerado (ver Gráfico 9). Trabajadores, indígenas, colegios profesionales y estudiantes son los que alcanzan mayor procesamiento de los conflictos que gatillan. Por lo tanto, quienes se movilizan con frecuencia y amplitud logran en mayor medida reacciones de parte de la autoridad.

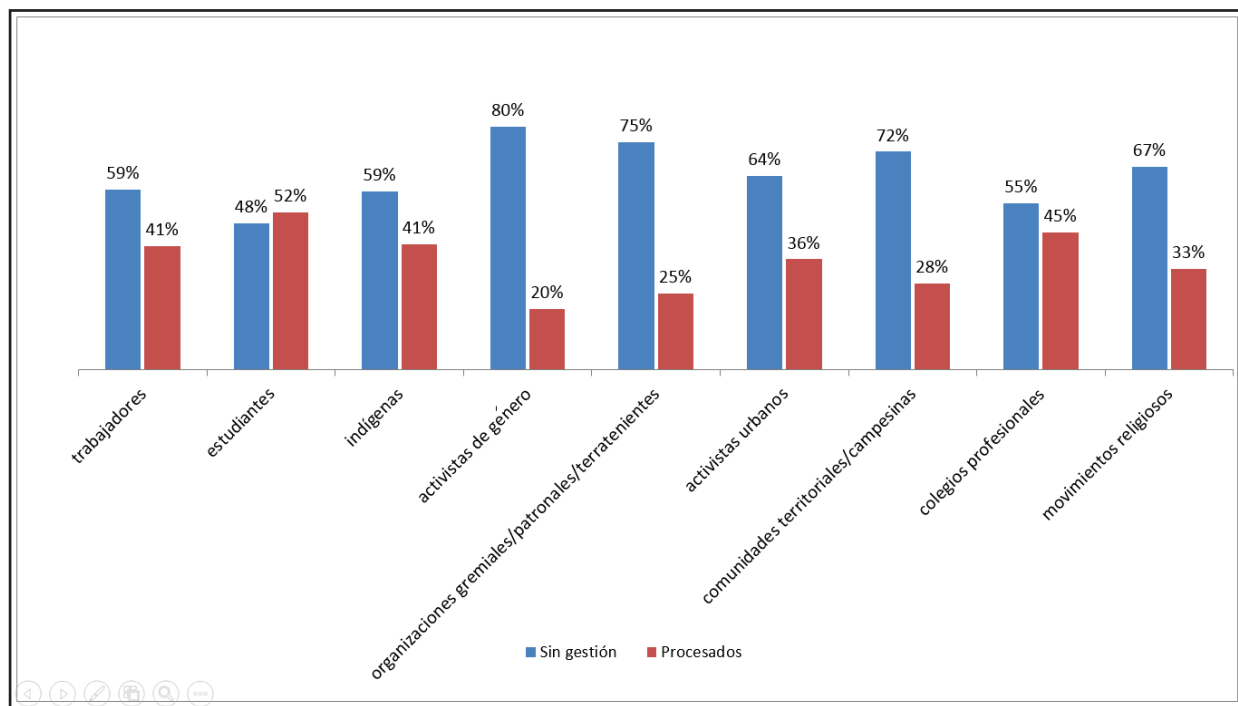
La misma tendencia se observa en términos del escenario de conflicto (ver Gráfico 10). Los conflictos que se han construido en torno a los derechos sociales y a lo étnico encuentran mayor procesamiento por parte del sistema

Gráfico 8. Evolución de la gestión del conflicto durante 2005-2012



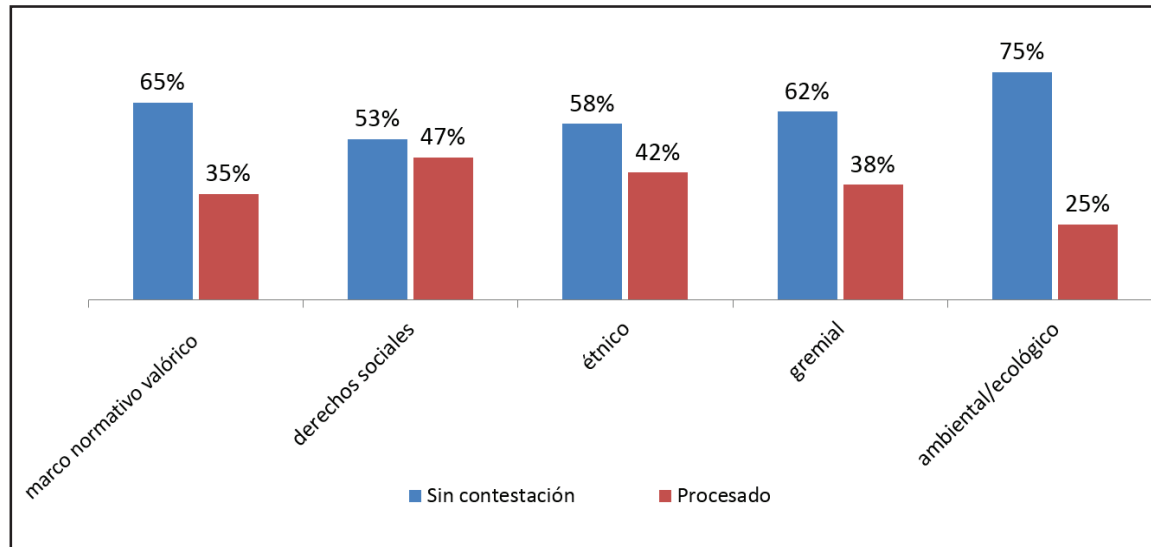
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Cronología del Conflicto Social en Chile (OSAL), años 2005-2012.

Gráfico 9. Gestión de los conflictos según actores



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Cronología del Conflicto Social en Chile (OSAL), años 2005-2012.

Gráfico 10. Evolución de la gestión del conflicto según escenario durante 2005-2012



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Cronología del Conflicto Social en Chile (OSAL), años 2005-2012.

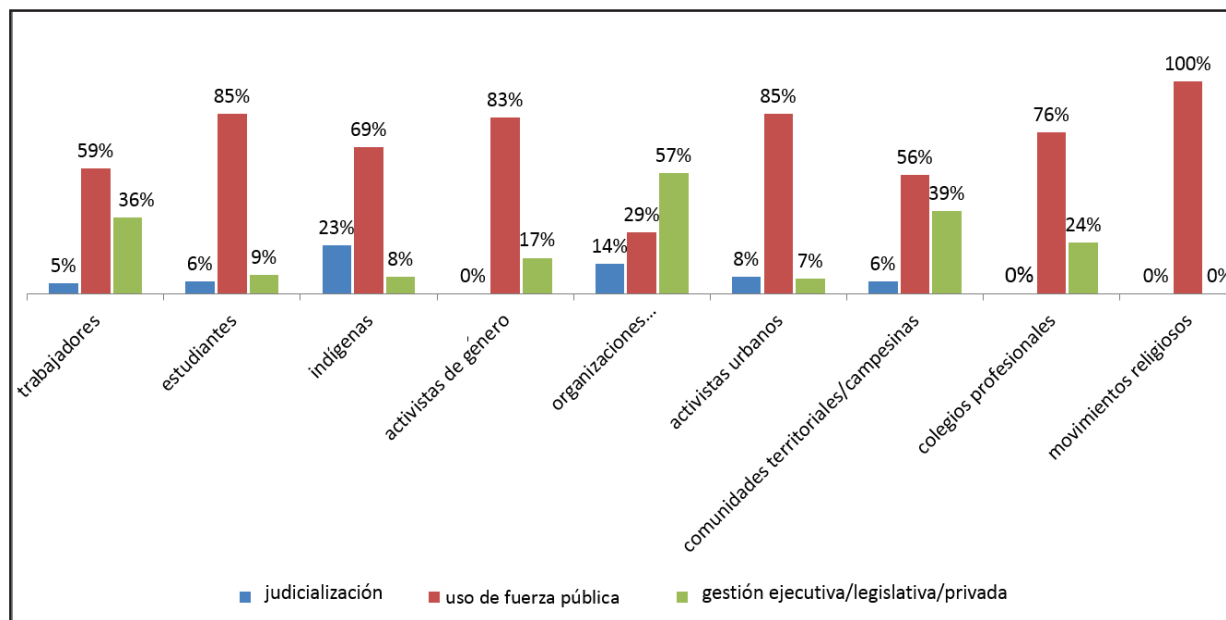
político. En cambio, aquellos conflictos más recientes o que cuentan con actores menos empoderados tienden a tener menor respuesta. Ahora bien, el que haya procesamiento de los conflictos gatillados por la protesta social no implica, necesariamente, que el sistema político integre a esos actores en instancias de gestión y discusión para arribar a soluciones. Lo que muestran los datos es que el sistema político tiende a priorizar estrategias represivas para procesar dichos conflictos.

Construimos el indicador tipo de gestión del conflicto para explorar las reacciones del sistema político (ver Gráfico 11). Lo que aparece con claridad es que los actores robustos, que aumentan sus factores de protesta, son enfrentados desde el sistema político mayormente mediante estrategias de represión. Esto es patente en el caso de los estudiantes,

los indígenas y los activistas urbanos, ante quienes la reacción estándar es el uso de la fuerza pública. En el caso de los indígenas se suma, además, la estrategia de judicialización, que involucra el encarcelamiento y la aplicación de las leyes de seguridad interior del estado y antiterrorista. Los trabajadores, que se mueven en el escenario gremial y en el alcance específico acotado, suelen recibir mayor gestión, sobre todo porque negocian directamente con las gerencias públicas y privadas para poner fin a sus conflictos.

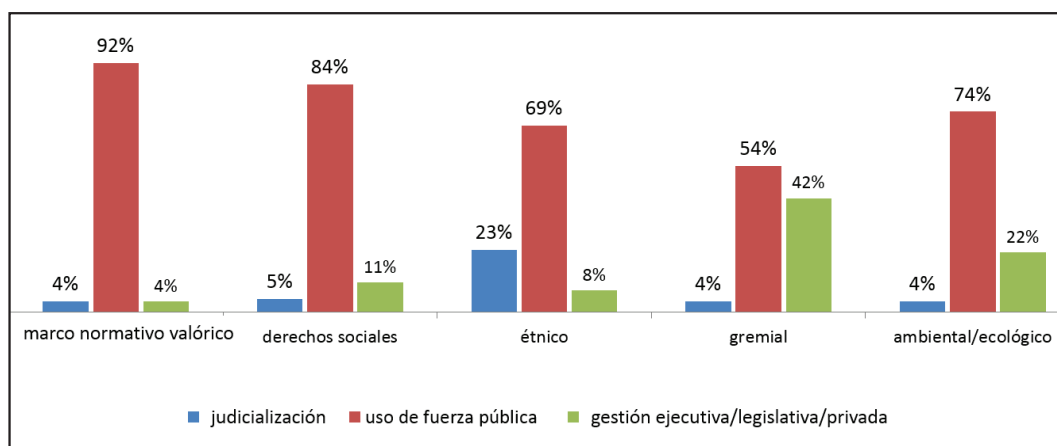
Lo anterior se expresa con claridad en términos del tipo de gestión según escenario de conflicto (ver Gráfico 12). Lo gremial y lo ambiental ecológico muestran mayor apertura a la gestión, es decir, a la integración y a la búsqueda consensuada de soluciones. Lo

Gráfico 11. Tipo de gestión del conflicto según actor durante 2005-2012



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Cronología del Conflicto Social en Chile (OSAL), años 2005-2012.

Gráfico 12. Tipo de gestión del conflicto según escenario durante 2005-2012



Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Cronología del Conflicto Social en Chile (OSAL), años 2005-2012.

étnico, lo relativo a los derechos sociales y lo normativo valórico (que es el ámbito de los activistas de género y religiosos, pero que representa una proporción menor en cuanto a su participación en los eventos conflictuales), tienden más bien a la represión.

5. Conclusiones

En este artículo nos hemos ocupado de observar los repertorios de protesta de los movimientos sociales, e interrogar desde ellos la estructura de oportunidades existente en el sistema político. A partir de este análisis, podemos sostener la idea de un proceso de politización creciente en la sociedad chilena en el periodo considerado.

Los factores o recursos que utilizan los actores que se movilizan han aumentado. Hay más eventos conflictuales, en los cuales participan y se articulan más actores. Se ejecutan proporcionalmente más acciones de protesta. Los alcances de la política y sus expectativas de transformación se ajustan –en una suerte de economía de escala– a ese aumento de factores de protesta, y, a su vez, se amplían. La transformación política se instala con fuerza como un deseo y desafía la idea de objetivos específicos y acotados que correspondía al modelo de movilización social que se había desarrollado en la transición. Los escenarios de conflicto que son disputados por los actores, el sistema político y los medios que los procesan comunicativamente también se han transformado. Al fin del ciclo analizado vemos que la acción de distintos actores ha expandido

los escenarios de conflicto. Los trabajadores, estudiantes, colegios profesionales y activistas urbanos han desplazado sus escenarios de lucha desde lo gremial (y específico acotado) a los derechos sociales. Los indígenas han logrado etnificar su conflicto, las comunidades territoriales se han posicionado entre los derechos sociales y los ecológicos ambientales.

Los datos muestran, entonces, que el aumento de los conflictos y los factores desplegados en ellos (alianzas entre actores y diversificación de las acciones de protesta) conducen a una ampliación de los alcances de lo político (la posibilidad de plantear transformaciones), y de los escenarios de la política (la semantización de espacios específicos de disputa). La movilización de los actores sociales, o de los movimientos sociales que es lo mismo, ha transformado la barrera de lo posible. Los ciudadanos no sólo quieren cambios, sino que plantean que éstos deben ser más profundos y en ámbitos que antes no eran considerados por la institucionalidad pública.

Aun cuando no toda la sociedad se encuentre involucrada en este proceso movilizadorio, éste se convierte en un termómetro social que afecta al conjunto de la población, y disputa/conquista sentidos políticos respecto a lo posible, sus intensidades y mecanismos para alcanzar los objetivos planteados. De otra forma no sería entendible, por ejemplo, que la interrogante acerca de una nueva constitución política que hace cinco años era inexistente en los sondeos de opinión, hoy sea una pregunta imprescindible. Ello dimensiona los rendimientos de este ciclo de politización.

Bibliografía

Aguilera, O. 2012. "Repertorios y ciclos de movilización juvenil en Chile (2000-2012)". *Utopía y Praxis Latinoamericana* 57: 101-108.

_____. 2008. "Políticas de las culturas juveniles y ciudadanías: Desafíos para la sociedad chilena en el Bicentenario". *Revista Observatorio* 20: 37-50.

Calderón, F. 2012. *La protesta social en América Latina*. Buenos Aires: Siglo XXI.

Castells, M. 1999. *La era de la información. Economía, sociedad y cultura. El poder de la identidad*. México D.F.: Siglo XXI.

Cousiño, C. y Valenzuela, E. 1994. *Politización y monetarización en América Latina*. Santiago: Instituto de Sociología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Delgado, R. 2005. *Análisis de los marcos de acción colectiva en organizaciones sociales de mujeres, jóvenes y trabajadores*. Tesis Doctoral en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud. Manizales: Universidad de Manizales-CINDE.

Della Porta, D. y Mosca, L. 2005. Globalización, movimientos sociales y protesta. *La sociedad civil en la encrucijada. Los retos de la ciudadanía en un contexto global*. Esquivel, E. y Covarrubias, I. (Comps.). México D.F.: Miguel Ángel Porrúa/ITESM/Cámara de Diputados. 45-68.

Favela Gabia, D. M. 2002. "La estructura de oportunidades políticas de los movimientos sociales en sistemas políticos cerrados: Examen del caso mexicano". *Estudios Sociológicos* XX: 90-120.

Fuentes, C. 2006. "Juventud y participación política en el Chile actual". *Revista Observatorio* 11: 51-55.

Gamson, W. 1992. "The social psychology of collective action". *Frontier in social movement theory*. Morris, A. y McClurg Mueller, C. (Eds.). New Haven: Yale University Press. 53-76.

Garretón, M. 2011. "Movilizaciones y movimiento social en la democratización política chilena". *La sociedad española en la transición. Los movimientos sociales en el proceso democratizador*. Quirosa-Cheyrouze, R. (Coord.). Madrid: Siglo XXI. 107-118.

_____. 2004. *América Latina en el siglo XXI. Hacia una nueva matriz socio-política*. Santiago: LOM.

Garretón, M., Cruz, A. y Aguirre, F. 2012. "La experiencia de los consejos asesores presidenciales en Chile y la construcción de los problemas públicos". *Revista Mexicana de Sociología* 74 (2): 303-340.

Goffman, E. 2006. *Estigma. La identidad deteriorada*. Buenos Aires: Amorrortu Editores.

Grimaldi, D. 2006. "Acción colectiva, demandas y decisiones: Marco analítico para la movilización estudiantil". *Revista Observatorio* 11:16-25.

Laraña, E. y Gusfield, J. (Eds.). 1999. *Los nuevos movimientos sociales: De la ideología a la identidad*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Mayol, A. y Azócar, C. 2011. "Politización del malestar, movilización social y transformación ideológica: El caso Chile 2011". *Polis. Revista de la Universidad Bolivariana* 10: 163-184.

Mc Adam, D., McCarthy, J. y Zald, M. (Eds.). 2002. "Movimientos iniciadores y derivados: Procesos de difusión en los ciclos de protesta". *Protesta social. Repertorios y ciclos de acción colectiva*. Traugott, M. (Ed.). Barcelona: Editorial Hacer.

_____. 1999. *Movimientos sociales. Perspectivas comparadas*. Madrid: Editorial ISTMO.

McCarthy, J. y Zald, M. 1973. *The trend of social movements in America: Professionalization and resource mobilization*. Morristown, N.J.: General Learning Press.

Melucci, A. 1999. *Acción colectiva, vida cotidiana y democracia*. México D.F.: El Colegio de México-Centro de Estudios Sociológicos.

OPECH. 2005. *Propuesta de trabajo de Estudiantes Secundarios de la Región Metropolitana*. En línea, disponible en: http://www.opech.cl/movisociales/propuestas/propuesta_secundarios_rm_05.pdf

Pizzorno, A. 1978. "Intercambio político e identidad colectiva en el conflicto laboral". *El resurgimiento del conflicto de clases en Europa Occidental a partir de 1968*. Pizzorno, A. y Crouch, C. (Coords.). Madrid: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 381-407.

Seoane, J. y Taddei, E. 2000. "La conflictividad social en América Latina". *Observatorio Social de América Latina* 2: 61-65.

Tarrow, S. 2002. "Ciclos de acción colectiva: Entre los momentos de locura y el repertorio de contestación". *Protesta social. Repertorios y ciclos de acción colectiva*. Traugott, M. (Ed.). Barcelona: Editorial Hacer. 99-130.

_____. 1997. *El poder en movimiento. Movimientos sociales, acción colectiva y política*. Madrid: Alianza.

Touraine, A. 1990. *Movimientos sociales de hoy. Actores y analistas*. Barcelona: Editorial Hacer.